

XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, 2009.

El bonapartismo del siglo XXI. Bolivia (2000-2009).

Schlez, Mariano M.

Cita:

Schlez, Mariano M. (2009). *El bonapartismo del siglo XXI. Bolivia (2000-2009)*. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-008/1212>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

El bonapartismo del siglo XXI. Bolivia (2000-2009)

Mariano Martín Schlez

El proceso revolucionario en Bolivia ha profundizado el debate político e intelectual en torno a la estrategia correcta para llevar a América Latina al socialismo. Se han formado, entonces, tres grandes posiciones: la que considera a los gobiernos de Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa (en diferentes grados) como la vanguardia de la Revolución¹; quienes caracterizan que, aunque no se trata de gobiernos “subordinados al imperialismo”, no terminan de romper con la burguesía, profundizando el desarrollo capitalista de la región²; y quienes los consideran como una nueva variante del nacionalismo burgués.³ Este trabajo intenta demostrar que el gobierno de Morales, lejos de una y otra caracterización, representa un momento particular de la lucha de clases: bonapartismo. Nuestro objetivo es, entonces, dilucidar la naturaleza social de las fuerzas enfrentadas y las estrategias que guían su accionar, además de evaluar las perspectivas políticas que de esta dinámica se desprenden.

En esta oportunidad nos concentraremos en la lucha de clases durante la presidencia de Evo Morales, omitiendo el proceso insurreccional que lo llevó al poder, utilizando como fuentes periódicos bolivianos de tirada nacional y regional, además de sitios de noticias de la web, ordenados y analizados a partir de un marco teórico marxista.⁴

¹Para el caso boliviano pueden consultarse Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo: *Bolivia. Memoria, insurgencia y movimientos sociales*, Bs. As., CLACSO, 2007; Stefanoni, Pablo y Do Alto, Hervé: *La revolución de Evo Morales*, Bs. As., Capital Intelectual, 2006. Para el venezolano ver Bilbao, Luis: *Venezuela en revolución: renacimiento del socialismo*, Bs. As., Capital Intelectual, 2008; Dieterich, Heinz: *Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI*, Bs. As., Nuestra América, 2005.

²Véase Lamas, Miguel: “Bolivia: Nueva Constitución y cruce de caminos en el proceso revolucionario”, en <http://laclase.info>.

³Expresa esta posición Guerrero, Alejandro: “Evo Morales entrega hasta su propia Constitución”, en *Prensa Obrera*, 23/10/2008, en <http://www.po.org.ar>.

⁴Debido a los límites que impone esta presentación no explicitaremos la forma en que utilizamos las categorías de análisis marxistas ni nos referiremos al período 2000-2005. Para esto puede consultarse Schlez, Mariano: “La explosión interrumpida. Bolivia, al borde de la guerra civil”, en V Jornadas de Sociología de la UNLP “Cambios y continuidades sociales y políticas en Argentina y la región en las últimas décadas. Desafíos para el conocimiento social”, Cristina Tortti y Juan Piovani (comp.), 1° ed., La Plata, UNLP, 2008

1. De la “nacionalización” de los hidrocarburos a la Asamblea Constituyente

El programa del MAS posee, desde su llegada al poder, dos grandes objetivos: sancionar una nueva Constitución y recuperar los recursos naturales de la Nación. A fines de 2006, el gobierno de Evo intentó motorizar la segunda de estas metas, a través de la firma de convenios con la Argentina, de venta de gas natural, junto a contratos de exploración y explotación de los hidrocarburos.⁵ Evo intentó mostrar el hecho como un gran triunfo, planteando el haber conseguido “una nacionalización sin indemnización”.⁶ Sin embargo, los contratos expresan la aplicación de la Ley de Hidrocarburos 3058, que es sustancialmente diferente de la nacionalización prometida y demandada por los movimientos sociales. Incluso Petrobras afirmó que “las reservas pueden ser contabilizadas por Petrobrás” y que los nuevos contratos le garantizan una rentabilidad por encima del 15%, tasa de retorno superior a sus costos de capital, y el control de una posición estratégica para el abastecimiento de gas natural a Brasil. Esta también es la posición de la petrolera británica BG Group.⁷ El Estado boliviano recibirá más ingresos con la legalización de los contratos petroleros, pero mucho menos que las transnacionales.⁸ Aunque las petroleras pagarán, en términos nominales, un 50% en regalías e impuestos en la mayor parte de los campos, Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Pluspetrol, Vintage y Pan American, quedaron más que conformes.⁹ Con respecto al segundo de los recursos fundamentales de producción, la tierra, a fines de 2006, el Congreso aprobó la Ley de Tierras, que agiliza los mecanismos para la reversión y distribución de tierras ociosas, aunque garantiza al mismo tiempo la permanencia de todos los latifundios que puedan demostrar que cumplen alguna función económica y social.¹⁰ Luego de su aprobación, las organizaciones de base del MAS mostraron su disconformidad con dicha ley, movilizándose para revocar la decisión del poder legislativo: en septiembre de 2007, la *Cumbre de organizaciones sociales de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y organizaciones populares de las ciudades*, con masiva presencia de dirigentes del MAS, aprobó una declaración que establece la necesidad urgente de “expropiación sin indemnización del latifundio y su distribución inmediata entre productores y del campo y la ciudad que estén dispuestos

⁵www.econoticiasbolivia.com.

⁶Declaraciones de Evo Morales. *La Prensa*, 30 de mayo de 2006. La Paz.

⁷*La Razón*, 3 de noviembre de 2006. La Paz.

⁸“Gas: la mayor tajada queda con las petroleras”, en www.econoticiasbolivia.com.

⁹“Bolivia: borrón y cuenta nueva con las petroleras”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹⁰“Evo logra legalizar los petrocontratos y la Ley de tierras”, en www.econoticiasbolivia.com.

hacerla producir en beneficio de la sociedad”.¹¹ Al mismo tiempo, la Confederación Obrera Boliviana (COB), también dirigida por sectores aliados al gobierno, lanzó un plan de lucha para recuperar el salario, en protesta contra el aumento de precios que afecta a la canasta familiar, organizando la “gran marcha nacional contra la inflación”.¹² A un mes de las jornadas de lucha, el gobierno aprobó, con el apoyo de cuatro mil campesinos que cercaron el Congreso, una ley que transformó el origen del financiamiento de un beneficio anual y vitalicio para todos los mayores de 60 años: de pagarse con recursos del Estado central –de YPFB, más específicamente–, pasó a financiarse con recursos de los gobiernos regionales, es decir, con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Mientras esto ocurría, la Asamblea Constituyente sesionaba en un recinto militar en Sucre, debido a los combates constantes entre grupos opositores y oficialistas con los asambleístas. Los enfrentamientos ocasionaron la muerte de tres civiles y más de 200 heridos, provocando el traslado de la Asamblea. El fracaso de la Constituyente se confirmó cuando, a pesar del acuerdo del gobierno y la oposición que garantizaba una Constitución consensuada, una fracción indigenista del MAS rompió el acuerdo de los dos tercios, determinando la profundización de los enfrentamientos por fuera de las instituciones: el 28 de noviembre de 2007 los gobiernos regionales opositores desarrollaron una huelga masiva en seis de las nueve regiones de Bolivia, que incluyó movilizaciones, golpizas a los grupos leales a Morales y acoso a los migrantes llegados del altiplano. Tras cumplir el paro, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca anunciaron estar listos, como lo dijo el presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, para “pasar al estado de resistencia civil movilizada ante el quiebre de la democracia”.¹³ Su lucha se profundizó en diciembre, cuando los prefectos, dirigentes cívicos, empresariales y populares de los valles, el oriente y sur del país se declararon en virtual desacato, y comenzaron una huelga de hambre desde el 3 de diciembre, llamando a la resistencia civil –que incluyó la toma de oficinas públicas, el intento de controlar la policía y el desacato militar- a las medidas gubernamentales, además de viajar a Washington para denunciar la acción del gobierno. Al mismo tiempo, la Asamblea Constituyente finalizaba sus sesiones con la redacción de una nueva Constitución Política que aún hoy espera ser sometida a la aprobación popular. Sin embargo, los asambleístas, expresando la polarización de las

¹¹“La rebelión de los 100 clanes”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹²“Más explotación laboral”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹³“En Bolivia hay dos gobiernos”, en www.econoticiasbolivia.com, 4/12/2007.

fuerzas bolivianas, no pudieron acordar los límites a los latifundios, por lo que la futura consulta al pueblo debería incluir esta cuestión.

2. Del fracaso de la Asamblea Constituyente a los referendums autonómicos

A pesar del ambicioso plan de lucha opositor, el inicio de 2008 mostró que “la medialuna” no contaba con el apoyo de la totalidad de su población: cientos de trabajadores rurales que protestaban en la norteña ciudad beniana de Guayaramerín, en contra del separatismo, fueron salvajemente golpeados por bandas fascistas, según denunció la dirigente agraria, Sonia Aguilera. Al mismo tiempo, se producían en Cochabamba violentos enfrentamientos entre grupos de choque organizados por el Comité Cívico y grupos indígenas. En Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Luis Núñez, planteó a los sectores oficialistas de sus regiones “abandonar Santa Cruz o, de lo contrario, atenerse a las consecuencias”.¹⁴ La fuerza de la oposición obligó a Morales a prometer la devolución de los 200 millones de dólares recortados a las regiones para los jubilados y la articulación de la nueva Constitución con los reclamos de autonomía regional. Sin embargo, las bases del MAS no le permitieron claudicar al Presidente: el mismo mes, la COB de Oruro emitió una declaración donde manifestó que “se mantiene aún el modelo económico neoliberal”.¹⁵

La agenda de lucha de las bases masistas tenía tres componentes fundamentales: 1) nacionalización de los recursos naturales (nacionalización y reversión de los yacimientos), 2) reversión de las empresas capitalizadas y 3) liquidación de las “leyes neoliberales”. A pesar de la presión popular, Evo no dejaba de enviar mensajes conciliadores: en marzo, luego del asesinato del Comandante de las FARC, Raúl Reyes, por parte del gobierno de Colombia, planteó que a su gobierno le importan tanto las buenas relaciones con Chávez y Correa, como aquéllas con Uribe y la monarquía española, además de alentar el desarme de las FARC.¹⁶

En abril, a 10 días del referéndum por la autonomía, el gobierno volvió a cargar sobre la oposición regional congelando las cuentas fiscales y suspendiendo los desembolsos de recursos hacia el departamento de Santa Cruz, entre los que se encuentra la coparticipación por los impuestos al gas. De inmediato, los cruceños se declararon en

¹⁴ Agencia Boliviana de Información, 27/02/2008, en <http://abi.bo/>.

¹⁵ “Dos años de Evo y no cambia nada”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹⁶ Ochoa Urioste, Mauricio: “Los otros amigos de Evo Morales”, en www.rebellion.org.

emergencia regional y denunciaron “otro golpe político” a la consulta del 4 de mayo, considerada “ilegal y separatista” por el oficialismo.¹⁷ El 3 de abril, en la presentación de su programa de gobierno, el Prefecto de Santa Cruz respondió poniendo la demanda cruceña en la misma línea de las protestas del agro en Argentina. Los niveles de confrontación determinaron la intervención de la Iglesia que, el día 10, llamó "vehementemente" al diálogo, anticipando un escenario de confrontación violenta si los sectores enfrentados no abandonan sus posiciones radicales.

En mayo de 2008 comenzaron a realizarse los referéndums autonomistas en las ciudades del oriente, que tenían por objetivo consultar a la población su posición sobre profundizar el proceso secesionista. Si bien es difícil objetar el triunfo de la oposición, el alto abstencionismo muestra que el éxito no ha sido abrumador y que, al interior de “la medialuna”, existen numerosos sectores simpatizantes del MAS. En Pando, por ejemplo, sumando ausentismo y votos por el “NO”, un 64,7% habría apoyado al gobierno; en Beni, el mismo cálculo muestra que el 44,3% estaría en contra de la autonomía. Las jornadas electorales se caracterizaron por hechos violentos en varias regiones. En la localidad beniana de Yucumo -fronteriza con La Paz- los pobladores quemaron urnas y golpearon al subcalde en plena calle. También incendiaron el material electoral los campesinos de Filadelfia, en el departamento de Pando, que el sábado habían obligado a "renunciar" al diputado Fermín Terrazas, bajo la acusación de haber contratado matones brasileños para intimidarlos. En la capital beniana, Trinidad, jóvenes se enfrentaron con palos y piedras con mototaxistas y simpatizantes masistas, con la destrucción una moto y al menos dos heridos. Los grupos de choque -la Unión Juvenil Cruceñista- portaron palos, piedras y armas de fuego, agrediendo a quienes manifestaban su voto por el “NO” al estatuto autonómico. Los sectores afines al gobierno bloquearon algunos caminos, quemaron urnas y boletas de sufragio y también golpearon a algunos ciudadanos por considerarlos autonomistas. A pesar de estar plenamente identificados los participantes de los hechos de violencia el Estado no sancionó a ninguna de las dos partes.¹⁸ Mientras se desarrollaban los enfrentamientos, algunas fracciones de la fuerza opositora parecían intentar acaudillar una salida dialogada, como es el caso del presidente del Senado y empresario cruceño Oscar Ortiz, que sostuvo que “Bolivia necesita un pacto. El gobierno debe reconocer el voto popular (en los referendos autonomistas) y propiciar un acuerdo nacional que se refleje en una

¹⁷La Nación, 4/05/2008, en www.lanacion.com.ar.

¹⁸Baspineiro, Alex Contreras: "Referenditis aguda", en www.rebellion.org.

nueva Constitución”. Ortiz reconoció que sin ello los estatutos autonómicos son inaplicables.¹⁹ Al mismo tiempo, el prefecto Costas pedía al sector agroindustrial acatar “coyunturalmente” las normas emitidas por el Gobierno de Evo (abastecer primero al mercado interno) para exportar aceite de soja y girasol refinado y crudo. Hasta ahora, sólo la empresa ADM-SAO, de la estadounidense Archer Daniels Midland, cumplía con esto y era autorizada a exportar. Sin embargo, las otras dos grandes empresas productoras de aceites, Fino del Grupo Romero del Perú y Rico de la Industria de Oleaginosas Sociedad Anónima (IOL.SA), propiedad de Branco Marinkovic, se resistían a cumplir y exigían que, en el marco de la autonomía, Costas les autorizara a exportar. Marinkovic encabezaba la línea más radical, que planteaba que el gobierno, desde el triunfo de los estatutos autonómicos, no debería tener más relación con los sectores productivos, sino que debería dirigirse por intermedio del gobierno departamental, como sostuvo el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca.

3. Del referéndum autonómico al revocatorio

En mayo, la escalada de enfrentamientos se disparó, fracturando incluso a la dirección de la fuerza opositora: Cordillera, la provincia más grande del departamento de Santa Cruz, rechazó el referéndum autonomista porque “pone en peligro la unidad de la nación boliviana”. La dirigencia planteó no sentirse representada ni por el “indigenismo” ni por el “autonomismo”, rechazando tanto la nueva constitución como los referéndums autonómicos, debido a que ambos seguirían entregando a las transnacionales el control de los recursos nacionales.²⁰

El mismo mes, en la capital del Beni, en Trinidad, paramilitares dependientes de la prefectura atacaron a periodistas de la radio gubernamental *Patria Nueva*. También en mayo se produjeron uno de los enfrentamientos más violentos de los últimos años, por los que Evo debió suspender su visita a Sucre. Allí, con el objetivo de impedir la llegada de Morales, la oposición agredió a unos 50 trabajadores rurales gritandoles “¡De rodillas indios de mierda!”, mientras los obligaban a desnudarse y arrodillarse en la plaza principal. Incluso el Alcalde de Mojocoya fue forzado a quemar la bandera del MAS y la Wiphala (símbolo de las naciones originarias) bajo los aplausos del presidente del

¹⁹Stefanoni, Pablo: “Avanza el separatismo cruceño”, en www.rebellion.org.

²⁰Ver voto resolutivo del Comité Cívico de Camiri, Provincia Cordillera, ASC-Noticias, 2/5/08.

Concejo Municipal y con la ausencia de la policía y el Ejército, que no pudieron intervenir porque una multitud los obligó a replegarse en sus cuarteles.²¹ Ante estos ataques, la Federación de Campesinos declaró una huelga de hambre de sus dirigentes y el inicio de un bloqueo de caminos, cercando la ciudad, con el objetivo de iniciar un bloqueo escalonado de carreteras que provoque la renuncia de la alcaldesa de Sucre, Aydé Nava, del presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, y del presidente del Comité Cívico, Jhonn Cava, responsables de la agresión. Esta medida fue, sin embargo, desautorizada por el gobierno de Morales, que instruyó el repliegue de los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Mostrando su impotencia, el gobierno central se limitó a expresar sus condolencias con los agredidos. Ante este ataque, la COB responsabilizó a “grupos pagados por los oligarcas y latifundistas de Sucre y la media luna”, advirtiendo “que de continuar este salvajismo fascista los mineros marcharemos en defensa de nuestros hermanos de clase para castigar a los culpables de estos atropellos que se vienen haciendo costumbre en Sucre y los departamentos donde controlan las bandas fascistas de adinerados extranjeros”.²²

Sin embargo, también se observan diferencias en el campo oficialista: a fines de mayo, la dirección oficialista de la Central Obrera Boliviana (COB) suspendió en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí, las marchas de protesta convocadas para condenar la escalada opositora y exigir al Presidente que cumpla con las demandas populares de tierra, trabajo, pan y más salario.²³ Incluso el propio Morales instruyó a los dirigentes de Chuquisaca la suspensión de un bloqueo de caminos y un cerco sobre la ciudad de Sucre que estaba siendo organizado por organizaciones indígenas.

La oposición centró sus demandas en siete condiciones para iniciar el diálogo: corregir la nueva Constitución, devolver a las prefecturas los recursos del IDH, reconocer la validez de los referendos sobre estatutos autonómicos, permitir la participación de la Iglesia católica, países amigos y dirigentes regionales en el diálogo, suspender las prohibiciones a las exportaciones agroindustriales, y diseñar un plan nacional para enfrentar a la inflación. El vicepresidente profundizó la estrategia dialoguista del gobierno al aceptar algunas de las condiciones impuestas: aquellas que tienen que ver con el ámbito de competencias del Congreso, trabajar por una verdadera Constitución pactada, evaluar los procedimientos prácticos para facilitar la representación de todos

²¹“Fascismo racista en Bolivia”, en www.rebelión.org.

²²“La COB va a la huelga desde el 16”, en www.econoticiasbolivia.com, 04/06/2008.

²³“Evo frena a la izquierda y da más alas al fascismo”, en www.econoticiasbolivia.com.

los sectores y la participación de la Iglesia y representantes de países amigos. Mientras, Santa Cruz profundizaba sus intentos separatistas constituyendo el Consejo Departamental -hasta ahora con funciones de fiscalización- en Asamblea Legislativa Provisional y cambiando el cargo del prefecto, Rubén Costas, en gobernador: el cartel de “prefectura departamental” fue reemplazado por el de “gobierno autónomo de Santa Cruz”.

Ante los hechos de violencia de Sucre, el avance de las autonomías y la tibieza del gobierno, la COB decretó una huelga general indefinida el 16 de junio, que incluyó movilizaciones y bloqueos de caminos a nivel nacional, con el objetivo de “frenar la rebelión de la oligarquía y obligar al presidente Evo Morales a cumplir con sus promesas de acabar con el neoliberalismo, profundizar las reformas y mejorar la calidad de vida de la población”, es decir, cumplir con la “Agenda de Octubre”, que postula la expropiación y pase al Estado de las empresas transnacionales del gas, petróleo y minerales, la expropiación de los latifundios y la entrega de tierras para los campesinos, el aumento general de sueldos y salarios, el control de precios de los alimentos y la aprobación de una nueva ley de pensiones. Esto fue anunciado, desde la Central Obrera de Oruro, por el minero Jaime Solares, dirigente de los levantamientos populares de 2003 y 2005. El programa defendido por los mineros plantea que la “lucha debe ir dirigida a arrebatar la fuente del poder económico de esta minoría oligárquica y latifundista. Eso significa luchar por el cumplimiento de las Agendas de 2003 y 2005, nacionalizando las empresas trasnacionales y recuperando las empresas capitalizadas”.²⁴ Las críticas de la COB se concentraron en exigirle a Evo que abandone su política conciliadora y que el Estado administre a las empresas por medio de un control social.

Ante esta escalada, tanto el gobierno como un sector de la oposición acordaron el llamado a un referendo revocatorio para los cargos de presidente, vicepresidente y para todos los prefectos. Sin embargo, los sectores más radicales de ambas fuerzas consideraban que la votación tan sólo ratificaría una situación de hecho y no resolvería la crisis política. Por ello, las bases del MAS creían urgente retomar la movilización y la lucha para recuperar el control de las calles y así evitar que la “oligarquía” afiance más su poderío. El balance de estos sectores no fue errado: el 10 de agosto Evo Morales fue ratificado en el cargo con el 67,4% de votos y, de 8 prefectos, 2 fueron revocados y 6 ratificados. Los dos prefectos derrotados pertenecían al campo opositor, y fueron ser

²⁴“La COB va a la huelga desde el 16”, en www.econoticiasbolivia.com.

reemplazados mediante elecciones. Morales aumentó su votación casi 14% en relación al respaldo obtenido en el año 2005, cuando fue elegido Presidente con un 54%.

4. Del referéndum revocatorio a la masacre de Pando

A pesar de que las fuerzas enfrentadas consolidaron su posición y de los numerosos llamados al “diálogo”, luego de la jornada electoral se potenciaron los antagonismos. Mientras las bases del MAS reclamaron “mano dura”, la oposición endureció su postura.²⁵ El 11 de agosto, a pesar del llamado de Evo y la Iglesia al trabajo conjunto, la respuesta de las prefecturas fue unánime: nada se negociará si antes el Ejecutivo no devuelve el IDH. Además, aseguraron que las regiones profundizarán el camino del autonomismo a través de la elección de legisladores propios y de la formación de una fuerza de seguridad que garantice el cumplimiento de los estatutos autonómicos votados en los referéndums. Mientras, los sectores sociales afines al MAS se movilizaban para dar vía libre al plebiscito por la tierra y la consulta sobre el nuevo texto constitucional: “No puede seguir postergando digan lo que digan, por lo tanto, máximo en tres meses después debe aprobarse la nueva Constitución”, manifestó el dirigente cocalero, Julio Salazar, e indicó que el Gobierno debe privilegiar las dos consultas. El 14 de agosto, la oposición instaló piquetes de huelga de hambre para presionar al gobierno y el 15 rompieron la mesa de diálogo, declarando un paro cívico con movilizaciones para el 19 y amenazando con la toma de oficinas públicas. Otro de sus objetivos era retrasar la elección de los prefectos que reemplazan a los revocados, aunque el eje del debate continuaba girando en torno al origen del financiamiento del beneficio mensual para los mayores de 60 años.²⁶ Por otro lado, las bases del MAS comenzaron a enumerar a sus enemigos en el gobierno: el dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz, Remigio Figueroa, planteó que los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Desarrollo Rural, Susana Rivero, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti “no velan por el interés del pueblo, sino de un grupo de personas que nosotros no conocemos”.²⁷ El 18 de agosto, el Ejecutivo ordenó reforzar la custodia de las instituciones públicas con la Policía Militar, en previsión de

²⁵*La Prensa*, de La Paz, 10/08/2008, en <http://www.laprensa.com.bo/>

²⁶Los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca demandan la devolución de 166 millones de dólares que fueron descontados por el Gobierno para pagar la Renta Dignidad y para la redistribución de la renta petrolera.

²⁷*La Prensa*, de La Paz, 17/08/2008, en <http://www.laprensa.com.bo/>

posibles tomas el día de la protesta opositora. Pese a las medidas, el 19 de agosto, la Unión Juvenil Tarijeña (UJT) tomó las oficinas de la Agencia Regional de la Aduana, en Tarija. El dirigente de la UJT, Sergio Rales, planteó que la toma “pacífica” forma parte de las reivindicaciones por el IDH y para consolidar las autonomías departamentales: “Es para que la Aduana dependa de la Prefectura de Tarija”.²⁸ El día del paro, en Santa Cruz, se registraron enfrentamientos entre la Juventud Cruceña y la Juventud Popular, con un saldo de 15 heridos. Mientras el gobierno renovaba los llamados al diálogo, Beni, Pando y Santa Cruz decidieron bloquear las rutas desde el día 20, jornada en que los ganaderos de Beni y Santa Cruz cortaron el suministro de carne a La Paz. El 21 de agosto, continuaron las tomas: unos 150 integrantes de la Unión Juvenil Beniana (UJB) y el Comité Cívico Juvenil tomaron el Servicio Departamental de Educación (Seduca), en Trinidad, demandando que la institución pase a la administración de la Prefectura. Ante estos hechos, Evo llamó al Ejército a defender la unidad nacional. El llamado fue levantado por la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), que el 22 devolvió el ataque opositor con el bloqueo de todos los accesos a Sucre, logrando su aislamiento. A través de cabildos y ampliados, la Federación eligió subprefectos, a los que buscó imponer por medio de la movilización.

El 24 de agosto, el gobierno redistribuyó por decreto el fruto del IDH, provocando la reacción de la oposición, que esperaba decidir sobre su destino y solicitó a las organizaciones realizar una cruzada de encuentros departamentales que garantice el triunfo del “SI” a favor del proyecto constitucional, solicitando además que le ayuden a “administrar el 67% de votos”.²⁹ Los días siguientes se profundizaron los cortes de rutas opositores que, a los bloqueos de los caminos a Paraguay y Argentina, le sumaron los de Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y Brasil. Sin embargo, el frente secesionista mostró algunas diferencias cuando, el 25, la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) suspendió la prohibición de mandar carne al occidente del país, después de que sus afiliados perdieran en siete días de paro alrededor de un millón de dólares. El 27, la oposición tomó el 90% de los peajes de rutas, impidiendo el cobro a los pasajeros y el 28, los prefectos de “la medialuna” anunciaron que boicotearán cualquier consulta sobre la nueva Constitución y sobre la Ley de Tierras. A pesar de la amenaza, la presión del Consejo Nacional por el Cambio (Canalcam), formado por organizaciones de base

²⁸www.bolivianpress.com, 19/08/2008.

²⁹*El Diario*, 27/08/2008, en www.eldiario.net/.

masistas, dio sus frutos: el gobierno llamó a un referendo nacional para ratificar la Carta Magna aprobada por la Constituyente y dirimir la extensión del latifundio para el 7 de diciembre de 2008. En la misma fecha se deberá elegir a los prefectos de La Paz y Cochabamba, y a subprefectos y consejeros departamentales. Inmediatamente, los prefectos y cívicos del oriente manifestaron que la convocatoria es ilegal e inconstitucional. El 30 de agosto, cuando sectores oficialistas se aprestaban a ingresar en la plaza principal de Santa Cruz para festejar el decreto gubernamental, grupos opositores los atacaron a golpes.³⁰ Pese a los niveles de violencia, ni la Policía Departamental ni la Guardia Municipal intervinieron en ningún momento. Ese mismo día, la oposición puso en marcha un plan para detener las consultas por medios judiciales. Al otro día, la Corte Nacional Electoral (CNE) no aprobó el decreto y pidió que se convoque a ambas consultas por ley congresal. Pero también ordenó detener la elección de asambleístas (convocadas para enero de 2009) en las regiones autonomistas. El 1 de septiembre, los cívicos del Chaco bloquearon el acceso al campo hidrocarburífero San Alberto, el productor de gas más grande de toda Bolivia, explotado por Petrobrás. El 2, fue tomada una oficina dependiente de la agencia USAID, hecho que el gobierno justificó. La agencia de cooperación de Estados Unidos ya había sido expulsada de Cochabamba el 25 de junio porque, según los productores de coca, conspiraba contra el gobierno. Ante este escenario, el 4 de septiembre, los miembros del Consejo Nacional Democrático (Conalde) de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, resolvieron:

“1) Masificar el bloqueo de carreteras (...) 2) Rechazar e impedir el propósito del Gobierno central de imponer un texto de reforma constitucional (...) 3) Ratificar nuestra decisión de profundizar la implementación de los estatutos autonómicos aprobados por nuestros pueblos (...) 4) Denunciar al pueblo boliviano la persecución política del Gobierno central a las autoridades departamentales y los dirigentes cívicos, con juicios sin basamento legal alguno; 5) (...) conformar un frente amplio en defensa de la democracia, que trabaje por la pacificación nacional y la recuperación plena de la democracia”.³¹

Para el 5 de septiembre, la oposición ya dominaba en Pando cinco instituciones estatales (el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Superintendencia Forestal, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las oficinas de Migración en la ciudad fronteriza de Cobija y la Aduana Nacional), mientras que, en Tarija, los universitarios

³⁰ *La Prensa*, de La Paz, 30/08/2008, en <http://www.laprensa.com.bo/>.

³¹ www.bolivia.com, 3/09/2008.

tomaron la oficina del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Evo denunció que detrás de estas ocupaciones existía un intento de dar un “golpe civil”. Para el 6 de septiembre, las tomas, asedios a campos petroleros y bloqueos fronterizos impidieron el normal abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) y diesel en Bolivia, lo que puso al país al borde de la crisis energética. El mismo día, las tomas de instituciones públicas ya habían llegado a once a lo largo de toda “la medialuna”. En Cobija, tres oficiales del Ejército fueron tomados como rehenes por cívicos y funcionarios regionales cuando se disponían a abastecer de gas lacrimógeno a las fuerzas estatales que custodiaban las entidades públicas. El 8 de septiembre comenzaron a desarrollarse enfrentamientos entre los viajeros y quienes bloqueaban los caminos, como sucedió en San Carlos. El 9 de septiembre, se produjo en Santa Cruz un violento levantamiento opositor que finalizó desplazando a las fuerzas de seguridad y con el copamiento de 22 entidades estatales. Los enfrentamientos en Santa Cruz y Tarija continuaron al otro día, dejando un saldo de 97 heridos. La oposición avanzó sobre otras 14 instituciones estatales.

Evo Morales reaccionó expulsando al embajador norteamericano, Philip Goldberg, a quien acusó de entrometerse en la política interna, fomentando la división nacional. El 11 de septiembre los combates alcanzarán niveles inéditos: en la ciudad de El Porvenir, en Pando, un grupo de sicarios llevó adelante una masacre contra trabajadores rurales, dejando un saldo de 25 muertos y 106 desaparecidos.³² El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró que los campesinos fueron emboscados por personal de la prefectura.³³ Los agresores no perdonaron ni a mujeres embarazadas ni a niños, que fueron arrojados al río Tahuamanu luego de ser asesinados.³⁴ Las víctimas plantearon que, cuando la Prefectura comenzó el ataque, la Policía no sólo no intervino, sino que huyó. Luego de los hechos, Evo declaró el estado de sitio en Pando y retomó el control del aeropuerto a través de las fuerzas armadas, provocando un saldo de dos muertos. El prefecto llamó a la población a desobedecer el estado de sitio, lo que llevó a enfrentamientos armados entre el ejército y fuerzas irregulares, el 13 de septiembre. Al salir a la luz la magnitud de la masacre, gobierno y oposición volvieron a mostrar voluntad de encontrar una salida “negociada” a través del “diálogo”.

5. El GAN: un diálogo muerto antes de nacer

³²<http://bolivia.indymedia.org/node/19335>.

³³<http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=89754>.

³⁴<http://www.losandes.com.ar/notas/2008/9/13/un-380715.asp>.

Luego de la masacre, Evo inmediatamente convocó a un “Gran Acuerdo Nacional”. El “diálogo político” incluyó los cambios constitucionales, en particular la demanda de autonomías departamentales y la redistribución del impuesto a los hidrocarburos.³⁵ El 5 de octubre, “técnicos” del gobierno y la oposición presentaron un documento que planteaba una propuesta de ajustes a la Constitución Política votada en Sucre, a fines de 2007.³⁶ Al otro día, los prefectos opositores aseguraron que no firmarán ningún acuerdo con el gobierno ni aceptarán el referéndum en sus regiones.³⁷ A pesar de la negativa, desde el 8 de octubre se retomó el diálogo legislativo con una serie de críticas opositoras a la Constitución oficialista: 1) al artículo 1 (que constituye a Bolivia en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías) por caracterizar que borra la Nación y la nacionalidad boliviana; 2) la elección por voto directo de las autoridades del Poder Judicial, aludiendo su probable politización; 3) la creación de una justicia comunitaria con igual jerarquía que la ordinaria y la imposibilidad de revisar sus decisiones; 4) el mandato presidencial de 5 años con una posibilidad de reelección; 5) la consulta a los pueblos indígenas para explotar los recursos naturales no renovables existentes en el territorio que habitan y la declaración de los recursos naturales e hidrocarburos como propiedad de los bolivianos; 6) el artículo 108, que plantea que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”, por considerar que vulnera la libertad de expresión; 7) la obligatoriedad de que los funcionarios deberán hablar, obligatoriamente, el español y una lengua originaria, lo que plantean como discriminatorio.³⁸

Es evidente que los puntos críticos son la reelección de Evo (que estaría habilitado a gobernar por 10 años más) y la propiedad de los recursos naturales. Al respecto, el MAS intentó calmar las aguas: el senador Félix Rojas aclaró, sobre la propiedad de los recursos, que sólo buscan garantizar que pertenecen al Estado boliviano y que no serán vendidos. Con respecto a la propiedad de la tierra, el MAS insiste en llamar a un referendo que dirima su extensión, que el proyecto constitucional plantea limitar en

³⁵*La Tercera*, 15/09/2008, en www.tercera.com.

³⁶Informe Diálogo Nacional: *Mesa Autonomías y Constitución Política del Estado*, Cochabamba, 5 de octubre de 2008.

³⁷“Nuevo golpe fascista contra Evo”, en www.econoticiasbolivia.com.

³⁸La oposición no acordó un documento conjunto, por lo que cada Partido presentó sus críticas en forma independiente. *La Razón*, 10/10/2008, en www.la-razon.com.

5.000 ó 10.000 hectáreas.³⁹ A los pocos días el MAS concedió la incorporación de los términos “nación” y “república”.

Anticipándose a un eventual fracaso del diálogo, las regiones opositoras ya preparan la resistencia. El director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, anunció el 10 de octubre la conformación de un frente amplio de defensa de la democracia, que planifique la movilización social para rechazar la propuesta oficialista.⁴⁰ Evo respondió organizando una marcha que, luego de recorrer 200 kilómetros, arribará a La Paz el lunes 20 de octubre, con la participación de unas 140 organizaciones.⁴¹ “¡La derecha no pasará!”, “¡Bolivia libre sí, colonia yanqui no!” y “¡Patria o muerte, venceremos!” son las principales consignas esgrimidas.

6. Conclusiones

A casi cuatro años de la llegada del MAS al poder, Bolivia se encuentra partida en dos. Existen, de facto, dos gobiernos: el de Evo, que controla el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí); y el de las burguesías regionales que domina seis de las diez ciudades principales del oriente y sur del país. En la disputa por el control de la renta de hidrocarburos y la tierra se expresa, al mismo tiempo, el combate intra-burgués y el sostenido entre las masas y la clase dominante. Ante este empate hegemónico, la llave la tienen los trabajadores. La estrategia conciliadora del MAS radicaliza a quienes llevaron a Evo al poder. A su vez, la “medialuna” avanza en sus niveles de organización y en la formación de alianzas, reforzando su disputa por los recursos y alineando bajo su proyecto a más capas sociales.

El proceso boliviano parece repetir un ciclo sin final a la vista: el gobierno intenta apropiarse de mayores tajadas de la renta de hidrocarburos, la derecha resiste, el MAS llama al diálogo, la oposición pasa a la ofensiva y a la acción directa, las masas responden de la misma manera, la medialuna es derrotada en las calles, pero un nuevo llamado del gobierno al diálogo vuelve a intentar “congelar” la situación. Evo actúa de esta manera porque él mismo es la expresión política de este impasse del proceso: tanto la profundización de la revolución socialista, como una restauración contrarrevolucionaria deberán prescindir de su figura. La necesidad de una dirección

³⁹ *La Razón*, 12/10/2008, en www.la-razon.com.

⁴⁰ *Idem*, 10/10/2008, en www.la-razon.com.

⁴¹ “Miles marchan por la ley de Evo”, en www.econoticiasbolivia.com.

revolucionaria de los explotados, que supere los límites del bonapartismo de Evo, se vuelve urgente. De lo contrario, la contrarrevolución, convencida de sus intereses y dispuesta a no claudicar hasta conseguirlos, le dará una salida a la crisis hecha a su medida.